



SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso: ORDINARIO LABORAL
Demandante: ADRIANA MARÍA MUÑOZ ALZATE
Demandado: COLPENSIONES
Procedencia: JUZGADO QUINCE LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN
Providencia: SENTENCIA n.º 96
Radicado n.º: 05001-31-05-015-2020-00352-01 (O2-22-406)

En Medellín, a los catorce (14) días del mes de junio de dos mil veintitrés (2023), en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 15 de la Ley 2213 de 2022, y en consonancia con el artículo 10 del Acuerdo PCSJA2011567-2020 del Consejo Superior de la Judicatura, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados **CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES**, **SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE** y **VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO**, quien actúa como magistrado sustanciador, procede a decidir el recurso de apelación propuesto por la parte demandante, dentro del proceso ordinario instaurado por **ADRIANA MARÍA MUÑOZ ALZATE** en contra de **COLPENSIONES**, proceso radicado bajo el n.º 05001-31-05-015-2020-00352-01 (O2-22-406).

Se deja constancia que el respectivo proyecto de fallo fue puesto a consideración de la Sala y estando debidamente aprobado, se procede a dictar la sentencia que en derecho corresponda,

1. ANTECEDENTES

Mediante poderhabiente judicial, la señora **ADRIANA MARÍA MUÑOZ ALZATE** persigue el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes causada por **PLUTARCO MONTAÑO FERNÁNDEZ** (q.e.p.d.), los intereses moratorios y/o la indexación, y las costas procesales, con fundamento en convivieron como compañeros permanentes desde el año 2014 hasta el fallecimiento de éste el 21 de noviembre de 2018; que al momento del óbito, el señor **MONTAÑO FERNÁNDEZ** se encontraba pensionado por vejez; y que solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a **COLPENSIONES** el 5 de diciembre de 2018, misma que le fue denegada mediante

Resolución SUB 7377 del 16 de enero de 2019 por no acreditar el requisito de convivencia.

1.1 TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA Y CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La demanda fue admitida por el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín mediante auto del 5 de marzo de 2021 (doc. 04), con el cual ordenó su notificación y traslado a la parte accionada.

COLPENSIONES contestó la demanda el 5 de abril de 2021 (doc. 07) a través de vocero judicial, oponiéndose a las pretensiones formuladas por carecer de fundamentos fáctica y legal, al tiempo de proponer la excepción previa de “*no comprender la demanda todos los litisconsortes necesarios*”, y formular las excepciones de mérito que denominó: inexistencia de la obligación de reconocer y pagar pensión de sobreviviente, inexistencia de la obligación de pagar intereses moratorios, improcedencia de la indexación, compensación, prescripción, imposibilidad de condena en costas, y buena fe.

Por auto del 9 de noviembre de 2021 (doc. 09), el despacho de instancia ordenó la citación de JENNIFER ANDREA TORRES ZÁBALA y MARIELA ARAQUE ÚSUGA, en calidad de intervinientes excluyentes, como posibles compañeras permanentes del pensionado fallecido, mismas que fueron emplazadas el 10 de febrero de 2022 (docs. 12, 13 y 14), sin que comparecieran al proceso.

1.2.- DECISIÓN DE PRIMER GRADO

El proceso se dirimió en primera instancia mediante sentencia proferida 27 de octubre de 2022 (docs. 17 y 18), oportunidad en la cual la cognoscente de instancia declaró probada la excepción de “*inexistencia de la obligación de reconocer y pagar pensión de sobrevivientes*”, y en consecuencia absolvió a las demandadas de todas las pretensiones incoadas por ADRIANA MARÍA MUÑOZ ALZATE, a la vez de gravar en costas a esta última y en favor de la entidad pública demandada.

1.3 APELACIÓN

Decisión que fue recurrida oportunamente en apelación por el apoderado judicial de la demandante, en cuyo sustento arguyó que si la prohijada manifestó en declaración extraproceso notarial que la convivencia fue desde el año 2014, para un total de 4 años

y 8 meses de convivencia, lo cierto es que tal declaración se debió a que los funcionarios notariales tienen una plantilla y los usuarios ni siquiera lo leen lo que firman. En adición, aseveró que, tanto en el trámite administrativo como en el judicial la demandante y los testigos indican que la convivencia fue desde el año 2013, lo que permite concluir que la convivencia se dio por más de 5 años. Añadió, que los testigos fueron concordantes y coherentes con la realidad, siendo que uno de los testigos admite que la convivencia se dio desde el año 2013, y todos expresan la ayuda mutua que se brindaban. Finaliza su intervención, indicando que las investigaciones administrativas de Colpensiones no dan cuenta de la realidad de la pareja.

1.4. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA

En la oportunidad legal para alegar de conclusión, la apoderada judicial de COLPENSIONES, allegó los alegatos de conclusión en los que expresa que la demandante alegó que los extremos de su convivencia con el causante son del 19 de marzo de 2014 hasta el 21 de noviembre de 2018, razón por la cual no se logra acreditar el requisito de convivencia mínima de 5 años. Además de acotar que mediante fallo emitido por el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín se ordenó a Colpensiones reconocer al señor PLUTARCO MONTAÑO FERNANDEZ los incrementos pensionales por tener a su cargo a la compañera permanente RUTH MAGDALENA QUINTERO GARCIA, misma que falleció apenas el 26 de marzo de 2014.

A su vez, el mandatario judicial de la demandante alegó de conclusión que está acreditado que el causante convivió por más de un lustro con la demandante desde el año 2013 hasta su fallecimiento en el año 2018, convivencia ininterrumpida, durante la cual se brindaron ayuda mutua y compartieron techo, lecho y mesa.

2. ANÁLISIS DE LA SALA

Surtido el trámite en esta instancia, sin observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, advirtiéndose que de conformidad con el principio de consonancia consagrado en el artículo 66 A del C.P.L. y S.S., el estudio del fallo impugnado se limitará a los puntos de inconformidad materia de la alzada, para lo cual se plantea el estudio del siguiente:

2.1. PROBLEMA JURÍDICO:

La Sala procederá a dilucidar ¿Si ADRIANA MARÍA MUÑOZ ALZATE reúne los requisitos legales para ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes causada por el señor PLUTARCO MONTAÑO FERNÁNDEZ (q.e.p.d.) en calidad de compañera permanente supérstite? ¿En caso positivo, deberá verificarse desde qué fecha procede el pago de las mesadas pensionales, su cuantía, y si se causaron los intereses moratorios pretensos?

2.2. TESIS DE LA SALA Y SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS JURÍDICOS PLANTEADOS.

El sentido del fallo de esta Corporación será **confirmatorio**, en tanto ADRIANA MARÍA MUÑOZ ALZATE no acreditó los requisitos legales para ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, de conformidad con los planteamientos que pasan a exponerse:

2.2.1. Pensión de sobrevivientes

Al *sub lite* le es aplicable el régimen legal contenido en los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, modificados por los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, dado que el causante falleció el 21 de noviembre de 2018 (doc. 01, pág. 23).

En orden a lo anterior, tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes, los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez o invalidez que fallezca. Punto sobre el cual no hay controversia, puesto que la entidad demandada reconoció pensión de vejez a PLUTARCO MONTAÑO FERNÁNDEZ mediante Resolución n.º 7535 de 1991 (doc. 10 pág. 6), sin que tal aspecto hubiese sido reprochado por las partes procesales.

Acreditado que el fallecido sí dejó causado el derecho para que sus posibles beneficiarios puedan acceder a la pensión de sobrevivientes, conviene resaltar el contenido del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, atinente a quiénes son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, entre otros, en forma vitalicia, el cónyuge o la compañera(o) permanente supérstites, siempre y cuando dicho beneficiario (a) a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad y acredite la existencia de vida marital con el causante por espacio mínimo de cinco años inmediatamente anteriores a la fecha del fallecimiento, siendo que la acreditación de tales requisitos es carga procesal de los eventuales derechohabientes, tal como lo ha reiterado

la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia en sentencia SL169-2021, en la que sostuvo que la convivencia le incumbe probarla a quien afirma el hecho.

De forma que, el asunto que amerita un análisis probatorio exhaustivo es si la señora ADRIANA MARÍA MUÑOZ ALZATE cumple con el requisito de la convivencia en calidad de compañera permanente superviviente, para lo cual deberá establecerse si demostró que convivió ininterrumpidamente con el causante, como mínimo en el lapso comprendido entre el 22 de noviembre de 2013 y el 21 de noviembre de 2018.

Ello así, de cara al estudio del requisito legal de la convivencia de la señora ADRIANA MARÍA MUÑOZ ALZATE y el causante, debe partirse del presupuesto de que desde el escrito genitor se confesó que *“El hoy occiso PLUTARCO MONTAÑO FERNANDEZ, (...) convivió como compañero permanente con la señora ADRIANA MARÍA MUÑOZ ALZATE (...), desde el año 2014, en la ciudad de Medellín (...), siempre vivieron juntos, nunca se separaron, la convivencia fue bajo el mismo techo, compartiendo el mismo lecho de manera singular y permanente y lo hicieron hasta el día del fallecimiento de éste ocurrido el día 21 de noviembre de 2018”* (doc. 01 pág. 4). Confesión que ya había sido efectuada por la misma demandante en las declaraciones extrajudiciales del 18 de septiembre de 2017 (doc. 01 pág. 28) y del 4 de diciembre de 2018 (doc. GEN-COM-CO-2018_15981182-20181217042018.pdf), en las que aseveró que: *“(...) convivo en unión libre en forma permanente singular y bajo el mismo techo en con señor PLUTARCO MONTAÑO FERNANDEZ con una relación desde hace 3 años”* (SIC); y que *“(...) Durante 4 años conviví en unión libre, desde el 19 DE MARZO DEL 2014, con el señor PLUTARCO MONTAÑO FERNANDEZ (...) compartimos techo lecho y mesa (...)”*.

Es decir, que aun asumiendo que la convivencia inició el 19 de marzo de 2014, a partir de lo confesado en los hechos del escrito incoativo de demanda y las declaraciones extrajudiciales trasuntas, lo cierto es que bajo esta premisa fáctica la pareja MONTAÑO MUÑOZ apenas alcanzó a convivir durante cuatro (4) años, ocho (8) meses y tres (3) días.

Ahora bien, alega el recurrente que si la demandante confesó que la unión marital de hecho inició en el año 2014, ello se debió a que la demandante no leyó la declaración extrajudicial antes de firmarla, argumento que debe ser desestimado *in limine*, toda vez que, como ya se indicó previamente, la confesión no se desprende únicamente de la declaraciones notariales en comento, sino también de lo narrado por el mismo apoderado judicial de la parte actora en el escrito de demanda.

A más de que los hechos objeto de confesión coinciden también con los descritos en las declaraciones extrajudicio por GERARDO CANO GALLEG0 y YADI ANDREA ONATRA LOZADA del 4 de diciembre de 2018, según los cuales: “(...) *PLUTARCO MONT0Y FERNÁNDEZ era soltero bajo unión marital de hecho con la señora ADRIANA MARÍA MUÑOZ ALZATE (...) en forma permanente y bajo el mismo techo (...) desde el 19 de marzo de 2014 (...)*” (doc. GRP-FSP-AF-2018_15485825-20181205040409.pdf); así como también coincide con lo afirmado extrajudicialmente por propio causante PLUTARCO MONTAÑO FERNÁNDEZ el 18 de septiembre de 2017 (doc. 01 pág. 27), quien en tal oportunidad depuso: “(...) *convivo en unión libre de forma permanente singular y bajo el mismo techo con la señora ADRIANA MARIA MUÑOZ ALZATE con una relación desde hace 3 años. (SIC)*”; y con la indicado por el susodicho a través de petición del 1º de noviembre de 2017 ante COLPENSIONES, en la cual de manera manuscrita solicitó que: “(...) *en caso de fallesimiento pasar mi pensión a adriana Maria Muñoz (...) que es mi compañera hace 3 años. (SIC)*” (doc. 07 pág. 31).

También, ha de resaltarse que el causante percibió incrementos por tener a cargo a su compañera permanente RUTH MAGDALENA QUINTERO GARCÍA hasta el fallecimiento de ésta el 26 de marzo de 2014 (doc. GEN-DOA-DA-2018_1602566-20180212124535.pdf), a la vez que en las declaraciones extrajudicio del 19 de mayo de 2014 (doc. 07 pág. 16 y 26) y del 27 de septiembre de 2016 (doc. 07 pág. 29), el causante asentó que: “(...) *desde hace 1 año convivo en unión libre con JENINIFER ANDREA TORRES ZABALA, bajo un mismo techo de manera singular y permanente (SIC) (...)*”; y que: “(...) *conviví en unión libre en forma permanente y singular y bajo el mismo techo con la señora MARIELA ARAQUE USUGA (...) durante 2 años compartiendo techo lecho y mesa desde el mes de abril de 2014 hasta el mes de septiembre de 2016 en que se dio por terminada la relación, (SIC)*” (subrayas propia de la Sala).

Es más, se tiene que para el 26 de junio de 2014 (doc. 07 pág. 20 a 22) y el 22 de agosto de 2014 (doc. GRF-AAT-RP-2014_6863672-20150318021626.pdf), el causante todavía solicitaba a COLPENSIONES el reconocimiento y pago de incrementos pensionales por tener a su cargo a su compañera permanente JENNIFER ANDREA TORRES ZABALA, y que en petición del 11 de noviembre de 2014 el causante relacionó como su “*BENEFICIARIO 1*” a la misma JENNIFER ANDREA TORRES ZABALA (doc. GRP-FSP-AF-2014_7555251-20140911155209.pdf).

Por lo dicho, ateniéndonos únicamente a las declaraciones del causante, las más de las veces afirmando que la convivencia de éste con la demandante MUÑOZ ALZATE apenas habría comenzado en el año 2016, después de finalizar las relaciones de pareja permanente y singular que el de cujus había sostenido con las señoras JENNIFER ANDREA TORRES ZABALA y MARIELA ARAQUE ÚSUGA.

En igual sentido, es de anotar que lo asentido por la demandante al absolver interrogatorio no puede ser tomado como cierto sin un cuidadoso análisis, puesto que conforme la regla de valoración probatoria establecida en el numeral 2 del artículo 191 del CGP constituye prueba de confesión todo lo que hubiere manifestado y sea desfavorable a ella o favorable a su contraparte, allende de la regla de la experiencia según la cual las personas no mienten en lo que les desfavorece, pero sí podrían hacerlo en lo que les beneficia. A contrario sensu, de otorgarse mayor valor probatorio a tal declaración de parte en beneficio de quien la emite, sin mayor análisis sustentado en otras pruebas, también supondría una abierta oposición al principio probatorio según el cual a los extremos litigiosos les está vedado confeccionar o construir su propia prueba.

Pautas de valoración probatoria conforme a las cuales se tiene que el interrogatorio de parte absuelto por la demandante no constituye prueba alguna de que ésta hubiere convivido ininterrumpidamente con el causante entre el 22 de noviembre de 2013 y el 21 de noviembre de 2018; ya que en tal sentido, su declaración entra en contradicción con las declaraciones que ella y el propio causante rindieron con antelación al fallecimiento del mismo, y con lo confesado en los hechos del libelo genitor.

En este punto, no pasa por alto el Despacho que en las declaraciones testimoniales sí se afirmó que la pareja MONTAÑO MUÑOZ inició su convivencia en el año 2013, concretamente el señor GERARDO CANO GALLEGO (min. 36:00 y ss.) declaró que le constaba que la pareja de marras convivió desde el año 2013; sin embargo, tal afirmación se contradice abiertamente con lo declarado extrajudicialmente por el mismo testigo el 4 de diciembre de 2018, oportunidad en la cual asentó que la pareja MONTAÑO MUÑOZ convivió “(...) *en forma permanente y bajo el mismo techo (...) desde el 19 de marzo de 2014 (...)*” (doc. GRP-FSP-AF-2018_15485825-20181205040409.pdf).

Por manera que, de la prueba testimonial en comento tampoco se desprende la fuerza de convicción necesaria para dar por probado que la demandante convivió ininterrumpidamente con el causante entre el 22 de noviembre de 2013 y el 21 de

noviembre de 2018, vistas las notorias contradicciones de las testificales frente a lo confesado por la demandante y lo manifestado por el mismo causante.

Lo anterior, máxime que al apreciarse las pruebas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, se advierte que la contradicción entre los dichos de los testigos y el de la parte demandante y del causante, al versar sobre situaciones personales de éstos y no de aquellos, debe resolverse necesariamente asignando un mayor mérito probatorio a los asertos de la propia parte y del causante, pues nadie está en mejor posición de indicar la verdad de los hechos acaecidos que las mismas personas que los produjeron, vivieron y afrontaron.

Conforme a todo lo expuesto, al aplicarse los criterios de la sana crítica en racional y libre persuasión, según lo dispuesto en el artículo 61 del CPT y de la SS, del cardumen probatorio recaudado se concluye que no se probó que la señora ADRIANA MARÍA MUÑOZ ALZATE y el señor PLUTARCO MONTAÑO FERNÁNDEZ conformaron una comunidad de vida con vocación de permanencia y convivencia ininterrumpida, como mínimo entre el 22 de noviembre de 2013 y el 21 de noviembre de 2018, y por ende, no se logró acreditar por la promotora del juicio el requisito legal aludido para ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes en calidad de compañera permanente supérstite, y en atención a ello, esta Sala procederá a impartir confirmación a la sentencia de primera instancia confutada.

2.3. COSTAS

Costas en esta instancia en a cargo de ADRIANA MARÍA MUÑOZ ALZATE, por haberse resuelto desfavorablemente el recurso de apelación impetrado en los términos del artículo 365 del CGP, a favor de COLPENSIONES, fijándose como agencias en derecho la suma de **\$1.160.000** equivalente a un SMMLV, en proporción al 50% de ese monto, en favor de cada una de las demandadas. Las de primera instancia se confirman, toda vez que la demandante fue vencida en juicio, según lo dispuesto por el artículo 365 del CGP.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN**, Sala Quinta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:


PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia materia de apelación proferida el 27 de octubre de 2022 por el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín, según y conforme las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: COSTAS en esta instancia a cargo de ADRIANA MARÍA MUÑOZ ALZATE, y a favor de COLPENSIONES, fijándose las agencias en derecho en la suma de \$1.160.000. Las de primera instancia se confirman.


Lo resuelto se notifica mediante **EDICTO**, acogándose el criterio de la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, vertido en la providencia AL2550-2021 del 23 de junio de 2021, M.P. Omar Ángel Mejía Amador.

Déjese copia digital de lo decidido en la Secretaría de la Sala y, previa su anotación en el registro respectivo, **DEVUÉLVASE** el expediente al Juzgado de origen. Se declara así surtido el presente acto y en constancia se firma por los que en ella intervinieron.

Comuníquese, notifíquese y cúmplase.


VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO
Magistrado Ponente


CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES
Magistrado


SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE
Magistrada

CONSTANCIA SECRETARIAL

Se deja constancia de que las anteriores firmas corresponden a las firmas originales de los magistrados que integran la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín.


RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario